



[CODE]

Barranquilla, 09 de septiembre de 2021

**SEÑORES**

**JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Dr.**

**JUEZ: LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ.**

**E. S. D.**

**Referencia: Expediente: 08-001-3333-006-2020-00071-00**

**Naturaleza: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

**Demandante: ELBA MARGARITA VILLA QUIJANO Y OTROS**

**Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN  
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

**JOSE MANUEL GONZALEZ JIMENEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía N° **12695159 expedida en Plato (Magdalena)**, portador de la Tarjeta Profesional número **T. P. # 184174** del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL, en el proceso de la referencia, según poder otorgado por el Doctor **CARLOS GUZMAN HERRERA**, Director Seccional de Administración Judicial, y estando dentro del término legal procedo a CONTESTAR la demanda de la referencia.

No es cierto, no me consta, no hay suficientes pruebas que permitan arribar a tal afirmación

Es cierto que se profirió resolución de acusación en contra del Señor Tomar Peña, pero en cuanto a las demás afirmaciones, son apreciaciones subjetivas de la parte actora.

## **I. RESPUESTA A LOS HECHOS**

**En cuanto al Hecho 3.1:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas.

**En cuanto al Hecho 3.2:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas

**En cuanto al Hecho 3.3:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas.

**En cuanto al Hecho 3.4:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas.

**En cuanto al Hecho 3.5:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas.

**En cuanto al Hecho 3.6:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas.

**En cuanto al Hecho 3.7:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas

**En cuanto al Hecho 3.8:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas.

**En cuanto al Hecho 3.9:** No es cierto, no me consta toda vez que de las pruebas aportadas



no se logra inferir tal acontecimiento.

**En cuanto al Hecho 3.10:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas

**En cuanto al Hecho 3.11:** No es cierto, no me consta toda vez que de las pruebas aportadas no se logra inferir tal acontecimiento.

**En cuanto al 3.12:** Parcialmente cierto, el hecho se puede apreciar en el curso extraordinario de casación, mas no se aporta prueba de radicado o vencimiento de la decisión del Magistrado Jorge mola Capera en sala.

**En cuanto al 3.13:** No es cierto, no me consta toda vez que de las pruebas aportadas no se logra inferir tal acontecimiento.

**En cuanto al Hecho 3.14:** No es cierto, no me consta toda vez que de las pruebas aportadas no se logra inferir tal acontecimiento.

**En cuanto al Hecho 3.15:** Parcialmente cierto, si elevó solicitud de prisión domiciliaria ante el magistrado Julio Ojito, los demás hechos son apreciaciones subjetivas de la parte demandante.

**En cuanto al Hecho 3.16:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas.

**En cuanto al Hecho Décimo séptimo:** Parcialmente cierto, el hecho se puede apreciar en el recurso extraordinario de casación, mas no se aporta prueba del vencimiento de la decisión del Magistrado Jorge mola Capera en sala o el salvamento de voto.

**En cuanto al Hecho 3.17:** Parcialmente cierto, el hecho se puede apreciar en el recurso extraordinario de casación, sin embargo, la sentencia de segunda instancia está incompleta, solo se aporta parte resolutive.

**En cuanto al Hecho 3.18:** Parcialmente cierto, la demandante si interpuso recurso extraordinario de casación, arrojando concepto favorable, sin embargo, en lo referente a la Tutela, no aportó dicha prueba, no me consta.

**En cuanto al Hecho 3.19:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas.

**En cuanto al Hecho 3.20:** Parcialmente cierto, si se evidencia casación de segunda instancia por el magistrado José Barceló con favorabilidad a la demandada, las demás consideraciones expresadas sobre el actuar de sus funciones como secretaria son apreciaciones subjetivas de la parte demandante.

**En cuanto al Hecho 3.21:** Es cierto, así se desprende de las pruebas aportadas

**En cuanto al Hecho 3.22:** Es cierto que se profirió resolución de acusación en contra de la señora Elba Margarita Villa Quijano, que sobrevino un largo proceso penal en su contra, pero en cuanto a las demás afirmaciones, son apreciaciones subjetivas de la parte actora, los agentes de la rama judicial actuaron conforme a derecho, no hay suficientes pruebas que permitan arribar a tal afirmación referente a que se haya dado una privación injusta de la libertad.

**En cuanto al Hecho 3.23:** No es cierto, no me consta toda vez que de las pruebas aportadas no se logra inferir tal acontecimiento, no se avizoran soportes de dichas noticias o difamaciones al buen nombre de la demandante a través de noticias o daños a familiares.

## **II. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA**



El artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas”. Se trata de una cláusula general de responsabilidad estatal, cuya estructuración se determina a partir del cumplimiento de dos (2) requisitos:

1. Existencia de un daño antijurídico
2. Que éste sea imputable a la acción u omisión de una autoridad pública.

La noción de daño antijurídico, fue definida por el Consejo de Estado, como aquella lesión patrimonial o extra patrimonial, causada en forma lícita o ilícita, que el perjudicado no está en el deber jurídico de soportar.

Por su parte, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -Ley 270 de 1996- reguló la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales, por las acciones u omisiones que causen daños antijurídicos, a cuyo efecto determinó tres presupuestos:

- ✓ Error jurisdiccional (art. 67)
- ✓ Privación injusta de la libertad (art. 68).
- ✓ Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69)

En el caso particular el demandante, Elba Margarita Villa Quijano, enfrentó un proceso penal bajo la vigencia de la Ley 600/00, destacándose las siguientes actuaciones procesales.

- El representante legal del ISS denunció trámite irregular de un proceso singular ejecutivo 01008-07 que se adelantaba en el Juzgado Tercero Civil Municipal Barranquilla, acaecida por la demanda del 31 octubre de 2007, Clínica la santísima trinidad contra ISS, en la cual se ordenó el pago ilegal títulos judiciales No 418010000923876 por valor \$ 432.196.656 a favor del ISS por una falsa representación y el pago irregular del título judicial No 418010000921445 por valor \$ 432.196.656 a favor del Apoderado representante de la Clínica., originando una demanda espuria, por el manejo de dineros estatales a la disposición del arbitrio de los abogados representantes de cada institución enunciada,
- El 19 diciembre de 2008 la Fiscalía 058 seccional de la unidad de delitos contra el patrimonio económico de barranquilla bajo radicado 305041, ordenó la apertura de la investigación previa por proceso espurio contra ISS que se adelantaba en el Juzgado Tercero Civil Municipal Barranquilla
- Con resolución No. 036 del 13 de mayo de 2011 se dispuso la ruptura de la
- unidad procesal y se asignó el radicado número 2400 para continuar



conociendo de la presente investigación.

- El 29 de julio de 2010 se realiza diligencia de indagatoria a la señora Elba Margarita Villa Quijano
- El 16 septiembre de 2011 la Fiscalía Quinta Delegada De La Unidad Nacional Anticorrupción impulso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario contra Elba Margarita Villa Quijano por delito de comisión delito de peculado por apropiación a favor de terceros.
- EL 19 de septiembre 2011 se libró orden de captura, terminando reclusa en el centro penitenciaria el buen pastor.
- El 21 de septiembre de 2011 sustituyen medida detención intramural a domiciliaria
- El 24 julio de 2012 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla profiere sentencia condenatoria en primera instancia de 126 meses de prisión, más multas y pena accesoria, inhabilitando derechos y funciones públicas, se revoca prisión domiciliaria y se traslada nuevamente a la cárcel 19 septiembre de 2012.
- El 27 febrero de 2014 se profiere sentencia segunda instancia en la sala penal, la cual confirma parcialmente sentencia de primera instancia, bajando así la pena a 87 meses de prisión más multas y pena accesoria, inhabilitando derechos y funciones públicas, nuevamente se concede prisión domiciliaria el 03 de marzo de 2014.
- Contra sentencia segunda instancia la señora Elba Margarita Villa Quijano, a través de apoderada judicial interpone recurso extraordinario de casación el 28 de mayo de 2014, la cual arrojó un concepto favorable el día 02 de septiembre de 2016
- El día 7 junio 2016 la demandante solicita libertad provisional, la cual se concede el 09 de junio de 2016.
- El 07 de junio de 2017 SP8072-2017 Radicación n.º 44248 (Acta n.º 182 La Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal, MP. José Luis Barcelona casó la sentencia en segunda instancia en contra de la demandante, declarando en su reemplazo la absolución de todos los cargos que pesaban contra la señora Elba Margarita Villa Quijano
- La Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal determinó la conducta de la demandante como una conducta desdibujada de dolo calificándola así culposa e imprudente.

Está claro que el procesado, hoy demandante en esta Litis enfrentó un proceso penal el cual se tramitó bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000.



El ente acusador resolvió situación jurídica, decidió investigar al demandante, resolvió situación jurídica e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario debido a que a la clase de delito por el cual estaba investigado.

Así las cosas, está demostrado que el demandante fue privado de la libertad por mandato del ente acusador y las indagaciones preliminares antes de ser trasladado a Juez competente en la Rama Judicial.

La Fiscalía siguió con el curso de la investigación, calificó el mérito del sumario con Resolución de Acusación ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla.

La causa fue sometido a reparto, la competencia del asunto la asumió el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla.

Ese Despacho Judicial tramitó el juicio, profiere sentencia condenatoria en primera instancia de 126 meses de prisión, más multas y pena accesorias, inhabilitando derechos y funciones públicas, revoca prisión domiciliaria y se traslada nuevamente a la cárcel el día 19 septiembre de 2012.

El 27 febrero de 2014 se profiere sentencia segunda instancia en la sala penal, la cual confirma parcialmente sentencia de primera instancia, bajando así la pena a 87 meses de prisión más multas y pena accesorias, inhabilitando derechos y funciones públicas, nuevamente se concede prisión domiciliaria el 03 de marzo de 2014.

El 07 de junio de 2017 SP8072-2017 Radicación n.º 44248 (Acta n.º 182 La Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal, MP. José Luis Barcelona casó la sentencia en segunda instancia en contra de la demandante, declarando en su reemplazo la absolución de todos los cargos que pesaban contra la señora Elba Margarita Villa Quijano

Sin embargo, la decisión fue absolutoria luego de que La Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal determinara que la conducta de la demandante fue una conducta desdibujada de dolo calificándola así culpable e imprudente.

Lo cual lleva a concluir que la demandante no estaba exenta de la investigación, la privación de la libertad, el error, el descuido, la imprudencia, toda vez que era una empleada del despacho judicial experimentada y el mal proceder así fuere sin mala intención descarriló una serie de acontecimientos en los que los agentes de la Rama



Judicial posteriormente al tratamiento acusado en fiscalía, aplicó, actuando de acuerdo a derecho.

Es claro que ninguno de los agentes de mi representada cometió alguna falla del servicio que ocasionara una privación de la libertad del demandante de manera injusta.

La norma penal adjetiva Ley 600/00 no le permitía al Togado revocar la resolución de acusación que pesaba en contra del investigado, máxime que el competente, -Fiscalía-, la revisó en primera y segunda instancia.

En contra de la Resolución de Acusación procede el recurso de apelación tal como lo señala la Ley 600/00 así:

**Artículo 191. Procedencia de la apelación.** Salvo disposición en contrario, el recurso de apelación procede contra la sentencia y las **providencias interlocutorias de primera instancia**.

Recurso que fue interpuesto por la defensa del acusado.

La imposición de la resolución de acusación sólo es facultad del ente acusador, así lo señala la norma que a continuación se indica:

**“Ley 600/00 Artículo 363. Artículo 114. Atribuciones.** *Corresponde a la Fiscalía General de la Nación:*

- 1. Investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes.*
- 2. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento.*
- 3. Tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito, cuando a ello hubiere lugar.*
- 4. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.**
- 5. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.*
- 6. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.*
- 7. Las demás que le atribuya el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación. (Negritas por fuera del texto)”.*

Por ello el Juez Sexto Penal del Circuito de Barranquilla no podía revocar la resolución de acusación que le fue impuesta al ciudadano, por medio de la cual se le llamó a juicio.





Pretender que el Juez Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, revocara la resolución de acusación, es ordenar que actúe contrario a derecho porque no tiene competencia para ello.

El Juez Penal sólo podía ordenar la absolución del caso una vez el proceso estuviera en fase de juicio antes de ello no estaba facultado.

Así lo señala la Ley 600/00 “**Artículo 39.** *Preclusión de la investigación y cesación de procedimiento.* (...)”

**El juez, considerando las mismas causales, declarará la cesación de procedimiento cuando se verifiquen durante la etapa del juicio** (Negrillas por fuera del texto)”

No se observa que el demandante hubiere manifestado al momento de correrse el traslado del artículo 400 de la Ley 600/00, solicitud de prescripción a su favor, pues ese era el momento procesal para que lo hubiere realizado.

“**Artículo 400.** *Apertura a juicio.* Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal.

Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, **solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación** y las pruebas que sean procedentes”

Durante el término de los 15 días que señala la norma antes en cita, el Juzgado deja a disposición de las partes el proceso para que soliciten las prácticas de pruebas o las nulidades que consideren

Los agentes de la Rama Judicial, sólo les correspondía determinar la responsabilidad penal del encartado, -dictar sentencia-, si fuera absolutoria o condenatoria y quedaba en firme la decisión que afectaría finalmente al demandante debido a la situación del proceso espurio acaecido en el despacho judicial donde elaboraba la actora.

Significa entonces que el demandante enfrentó un proceso penal por decisión judicial emitida primariamente por fiscalía general de la nación lo cual dio origen a los demás pasos del proceso por los agentes de la Rama Judicial.



El demandante obro con falta de cuidado en el deber objetivo, al realizar o permitir darse situaciones que generaron peculado por apropiación a favor de terceros, lo cual son conductas que dan origen lógicamente a capturas y privación de la libertad para posteriormente determinar y analizar los EMP y sea el togado quien determine su absolución o condena, del cual en el presente caso resulto siendo en el recurso extraordinario de casación en el cual resulto más favorable para el hoy demandante.

En consecuencia, se está en presencia de una falta de legitimación en la causa por pasiva a favor de la Rama Judicial, el nexo de causalidad entre lo ocurrido a la señora Elba Margarita Villa Quijano y las actuaciones realizadas por los agentes de la Rama Judicial se hizo conforme a derecho

### **III ESTUDIO DE PERJUICIOS**

Al no haber causado la Rama Judicial el daño que manifiesta el actor que se le ha ocasionado y consecuentemente, al no tener legitimación en causa por pasiva, no es procedente declarar la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. En este mismo sentido.

Para que exista una obligación de indemnizar, deben estar cumplidos los tres elementos axiales de la responsabilidad extracontractual, los cuales son:

El **daño**, la **culpa** y la **relación de causalidad** entre la conducta del imputado y el daño.

El **daño** es el trastorno, menoscabo o lesionamiento de un patrimonio, puede ser en su aspecto (i) económico, pecuniario, material, o en su (ii) aspecto moral. Este es el primer elemento constitutivo de la responsabilidad y de la consecuente obligación de repararlo. El daño se puede definir como toda desventaja en los bienes jurídicos de una persona y, para ser tenido en cuenta, debe ser cierto (al menos con una certeza relativa) no eventual.

El Daño civil indemnizable es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima.

El autor Adriano Cupis hace referencia a que el daño es la lesión a un derecho subjetivo que tenía la víctima en relación con el bien lesionado. El daño será indemnizable cuando se lesiona las facultades jurídicas para exigir o recibir el beneficio que ha sido suprimido.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Tratado de Responsabilidad Civil; tomo II, Javier Tamayo Jaramillo, editorial Legis; pagina 330.*





El daño para que sea indemnizable debe tener ciertas características, en cuanto a las condiciones de perjuicio indemnizable, decimos que este debe ser cierto, y la persona que reclama la indemnización debe ser la misma que resulto perjudicada, aunque el primer bien lesionado no fuera de su propiedad o no fuera su propia integridad la que se vio lesionada; finalmente, el beneficio moral o económico que se ve disminuido o suprimido debe estar protegido por el orden jurídico, si es que se pretende obtener su reparación.<sup>2</sup>

El daño se puede clasificar en daño emergente y lucro cesante. El primero hace referencia a la disminución patrimonial directa derivada del hecho dañoso, mientras que el segundo se refiere a la ganancia dejada de obtener por ella, la pérdida de algo que habría llegado a formar parte del patrimonio si el evento dañoso no se produce.

**La culpa** es el elemento subjetivo que pretende establecer una relación entre el hecho (la conducta o el hecho del agente consiste en una transformación de la realidad exterior) y la voluntad o querer del presunto responsable, y suele definirse como un error de conducta que no cometería una persona prudente y cuidadosa situada en las mismas condiciones externas que el autor del daño. La culpa es un elemento meramente subjetivo que conlleva al agente a comportarse como lo haría un hombre prudente o avisado.

El **Nexo causal**, que es la indispensable relación de causa a efecto, entre el hecho y el resultado o daño, siendo otro de los requisitos ineludibles para establecer o declarar la responsabilidad jurídica civil. Hay causalidad cuando una cosa ocurre después de otra, pero de modo tal que, sin la primera, la segunda no habría sucedido. Esto significa que la causa de un resultado, es aquella que, de no existir, hace desaparecer inmediatamente el resultado. Hay entonces relación de causalidad cuando la acción u omisión culposa es la causa directa y necesaria del daño, es decir, cuando sin el hecho, el daño no se hubiera producido.

Ahora bien, como quiere que en el caso particular no existe un nexo de causalidad entre el daño que el actor dice haber sufrido y las actuaciones desplegadas por esta entidad, no hay necesidad de que este apoderado judicial entre a estudiar los presuntos perjuicios que el demandante estima haber padecido.

Corolario a lo anterior, el Consejo de Estado ha unificado criterios con respecto al pago de los perjuicios morales, los cuales en el caso particular no proceden porque esta entidad no es la responsable del daño que los demandantes sufrieron, toda vez que los mismos fueron ocasionados por un tercero y vale recordar que el Estado no es un asegurador general.

---

<sup>2</sup> *Tratado de Responsabilidad Civil; tomo II, Javier Tamayo Jaramillo, editorial Legis; pagina 335.*



#### **IV EXCEPCIONES DE MERITO**

##### **1. SE ACTUÓ BAJO EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL.**

El demandante enfrentó una investigación penal que terminó en un juicio, fue señalado junto con otras personas de ser los responsables de la comisión de un delito.

Por esas situaciones fácticas el ente acusador lo investigó por los punibles del caso,

La actuación de la Fiscalía de proferir Resolución de Acusación estuvo ajustada a derecho porque:

- Los delitos por los cuales investigó era procedente la resolución de acusación.
- Para el momento de la resolución de acusación el ente acusador contaba con testigos de cargo y otras pruebas en contra del procesado lo cual no se le pudo comprobar porque operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

Por ello el ente acusador contaba con los requisitos de Ley para investigarlo y dictar una resolución de acusación en contra del procesado.

El Fiscal del caso, no podía dictar una Resolución distinta a la que profirió, pues en su momento contaba con dos indicios de responsabilidad penal en contra del procesado que le exigía la norma, requerirle una decisión distinta es pretender que realizara un acto contrario a derecho.

Debe entenderse que la imposición de una **Resolución de Acusación** y la **Cesación de Procedimiento Por Prescripción de la Acción Penal**, son dos proveídos completamente distintos. El primero exige unos requisitos menos gravosos que el segundo y la actividad probatoria dentro del proceso penal es cambiante.

Añádase a la presente excepción todo lo indicado a lo largo de la contestación de la demanda.



## **2. DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA**

El Honorable Consejo de Estado Sección Tercera, en Sentencia 66001233100020100014701 (46360), dic. 15/17 C. P. Jaime Enrique Rodríguez en un caso similar resolvió:

“La Sección Tercera del Consejo de Estado negó la indemnización de perjuicios solicitada por un taxista que estuvo privado de la libertad injustamente, por haber sido capturado mientras transportaba a uno de sus pasajeros a cobrar el dinero de una extorsión y señalado, posteriormente, por la víctima del delito como partícipe del mismo.

En sustento de su decisión, el alto tribunal hizo ver que si bien la investigación penal precluyó, luego de que se evidenciara su falta de intervención en la ejecución del hecho punible investigado, la detención obedeció a la conducta del procesado, lo que rompe el nexo causal necesario para atribuirle a la administración el deber de reparar los perjuicios causados.

Precisamente, la Sala advirtió que la aprehensión en flagrancia obedeció a la situación fáctica en la que fue encontrado, lo que dio lugar a que fuera dirigido a las autoridades judiciales para la apertura de una investigación por extorsión.

Durante el trámite, el juzgado de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento restrictiva de la libertad al imputado, debido a que encontró demostrado el requisito de necesidad de la medida, en tanto las circunstancias permitían inferir la probabilidad de participación del capturado en el ilícito endilgado.

A juicio de la corporación, esta situación impidió calificar de arbitraria a la captura, por cuanto se adelantó con fundamento tanto en la afirmación que hiciera la víctima de la extorsión sobre la participación del capturado en el delito como en su presencia en el lugar de los hechos.

Lo anterior debido a que, como se demostró en el proceso, el accionante acompañaba regularmente a la persona que efectuaba actividades sospechosas que dieron lugar al inicio la investigación penal, sin que se notara el más mínimo reparo por la conducta de quien lo contrataba para que le prestara el servicio de transporte.

Justamente, la Sala explicó que, en este evento, la conducta del sindicado determinó el inicio de una investigación en su contra, pues se encontraba en circunstancias alejadas de la actuación debida que le era exigible en los términos del artículo 63 del Código Civil.

Por tanto, concluyó que el daño, aunque antijurídico, no es imputable al Estado, porque lo determinante y exclusivo para que ocurriera la aprehensión fue la conducta omisiva del actor, quien no cuestionó ni reprochó las actividades que realizaba la persona que



transportaba, hecho que permite clasificar su conducta como gravemente culposa y, así mismo, exonerar de responsabilidad a la administración de justicia.”

Sobre la Culpa y la Falta de cuidado el Consejo de Estado, en Sección Tercera, Sentencia 25000232600020080023801 (47448), oct. 23/17 C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, indicó que la absolución por la justicia penal no configura responsabilidad patrimonial de la Administración:

“Aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que originaron la investigación y la privación de la libertad o el comportamiento asumido dentro del curso del proceso no haya sido suficiente para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad civil y administrativa podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima y con ello exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Así lo explicó la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver un recurso de apelación dentro de un proceso de reparación directa.

Justamente, el fallo aseguró que cuando la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal no quiere decir, *per se*, que se configure la responsabilidad patrimonial de la Administración.

**Ello toda vez que debe revisarse la culpa del penalmente investigado, dado que pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito sí puede exonerar a la Administración.**

Cabe resaltar, conforme el criterio de la Sala, que la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción dada por el artículo 63 del Código Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

Por ello, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”. (Negritas por fuera del texto).

Igualmente, la Corte Constitucional, Sentencia SU-072, jul. 5/18 sostuvo:

“De acuerdo con todo este contexto, la Corte ratificó que el artículo 90 de la Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal específico, como tampoco lo hacen el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y la Sentencia C-037 de 1996, cuando el hecho que origina el presunto daño antijurídico es la privación de la libertad.



Lo anterior en tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han aceptado que el juez administrativo debe establecer en estos casos el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso.

En otras palabras, definir una fórmula automática, rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en hechos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 y de paso el régimen general de responsabilidad, previsto en el artículo 90 constitucional.

Y es que la Sala Plena debía establecer, en ejercicio de su competencia para guardar la integridad y supremacía de la Carta Política, si las decisiones judiciales cuestionadas por los accionantes y que invocaban la jurisprudencia de lo contencioso administrativo se ajustaban a la interpretación referida.

En efecto, señaló que “determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia, el Estado deba ser condenado de manera automática, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo del juez que determine si la decisión que restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede el precedente constitucional fijado”.

Y concluyó que lo señalado no se opone a que otros supuestos o eventos queden comprendidos por un título de imputación de esa naturaleza, tal y como podría ocurrir, en principio, con aquellos casos en los cuales el comportamiento no existió o la conducta es considerada atípica.”

De las sentencias transcritas en los párrafos que anteceden, se logra concluir que, en los casos de privación injusta de la libertad, no se puede aplicar en forma automática y sistemática el régimen de responsabilidad objetiva, por lo tanto, el fallador debe acoger los planteamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional por ello está llamado a estudiar las particularidades del proceso penal.

Queda demostrado que no se puede establecer una regla de tres para resolver el asunto, se hace necesario que cada caso se evalúe a fondo, que el Juez Administrativo entre leer el proceso penal en su completitud para que así pueda saber si los motivos que tuvo el fiscal cuando resolvió situación jurídica, calificó el mérito del sumario se ajustaron a los postulados constitucionales y legales de esa época para que pueda en forma acertada establecer:

- Si existió un daño
- Qué entidad causó el daño
- Si el daño fue producto del actuar torpe o descuidado de la víctima
- Si se originó a causa del proceder de un tercero



### **V PRETENSIÓN.**

Por lo anteriormente expuesto, depreco que no se acceda a las pretensiones de la demanda y se absuelva a mi defendida de toda responsabilidad.

### **VI FUNDAMENTOS DE DERECHO**

- Sentencia CE Sección Tercera, N° 66001233100020100014701 (46360), Dic. 15/17 C. P. Jaime Enrique Rodríguez.
- Sentencia CE Sección Tercera, N° 73001233100020100034201 (43818), 24/08/17.
- Corte Constitucional, Sentencia SU-072, Jul. 5/18.

### **IV NOTIFICACIONES**

Las recibiré en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, localizada en el primer piso del edificio del Centro Cívico de esta ciudad o a través del correo electrónico: [dsajbaqnotif@cendoj.rama.judicial.gov.co](mailto:dsajbaqnotif@cendoj.rama.judicial.gov.co)

Atentamente

*Jose Gonzalez J.*

**JOSE MANUEL GONZALEZ JIMENEZ**  
**CC # 12695159 expedida en Plato (Magdalena)**  
**T. P. # 184174 del C. S. de la J.**  
MAVS